

Crisis del sindicalismo y estrategias sindicales del «Intercambio político»: las enseñanzas del debate italiano, 1975-1985

Udo Rehfeldt

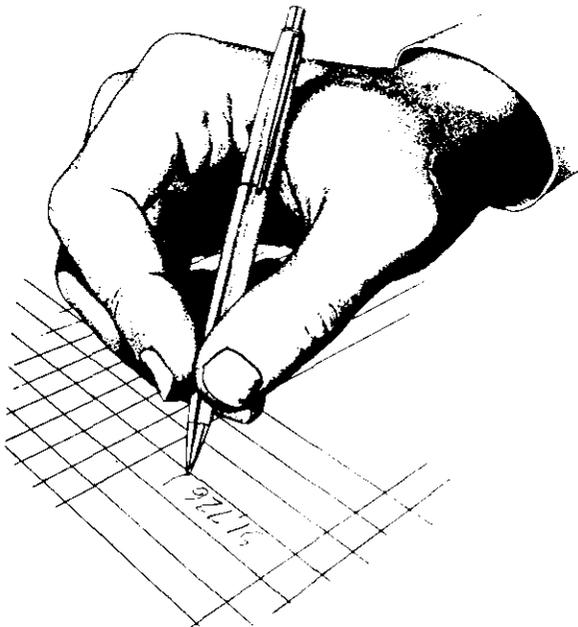
(Traducción de Luis Fernando Felipe y José Robleda)

Introducción

A pesar de las perennes diferencias de las estructuras socioeconómicas y de las tradiciones político-culturales, se puede observar, a partir de la mitad de los años setenta, una cierta convergencia de las estrategias sindicales en Europa. Esta convergencia no es debida a una intensificación de las discusiones transnacionales en los sindicatos y, aún menos, a una verdadera coordinación internacional de los programas y prácticas sindicales; se trata más bien de reacciones convergentes frente a la prolongación de la crisis económica y a la intensificación de los cambios tecnológicos y sociales. Estos cambios sitúan a los movimientos obreros de todos los países europeos ante problemas tendencialmente semejantes. La convergencia en las formas de reacción se explica así, esencialmente, por la convergencia de las condiciones económicas. También es resultado de la creciente internacionalización de las economías y de la intensificación de la competencia internacional.

Esta convergencia de estrategias sindicales se plasma, de forma predominante, en una actitud defensiva en relación a la crisis económica. Los sindicatos han debido de afrontar el avance de las tesis neoliberales sin disponer de una concepción alternativa para superar la crisis económica y los problemas de empleo (se descartan propuestas que suponen, para su realización, un derribo de las relaciones de las fuerzas sociales poco probable en un porvenir a medio plazo). A lo más lejos que los sindicatos llegan es a un concepto «mixto» que intenta mantener elementos importantes del sistema actual de la economía «mixta» (en particular el Estado de bienestar), subrayando su disposición a «concesiones» limitadas frente al capital, tendentes a permitir a éste adaptarse a las nuevas condiciones económicas y aumentar su capacidad competitiva gracias a una política de «modernización». Esta oferta de aceptación parcial de constreñimiento económico va acompañada, por lo general, de reivindicaciones «cualitativas»: reformas estructurales que supongan un ensanchamiento en la esfera de los derechos sociales, políticas activas de empleo, etcétera.

Esta oferta ha sido descrita por teóricos italianos con el paradigma del «intercambio político»¹. Visto de la forma más general, designa una elección estratégica, en la cual el sindicato renun-



cia a utilizar plenamente su poder de negociación sobre reivindicaciones inmediatas (esencialmente salariales), a cambio de la satisfacción de reivindicaciones «estructurales» a más largo plazo. Se trata, pues, de una forma particular de compromiso social que sobrepasa el marco habitual de la negociación colectiva y que engloba la «concertación social» en un amplio sentido, inclusive a nivel político. Esta tesis se opone a las teorías pluralistas, pero también a una cierta tradición marxista de la acción sindical que intenta aislar al actor sindical en el interior de un «sistema de relaciones profesionales», limitado a la negociación/lucha por la mejora de los salarios y de las condiciones de trabajo, dejando el dominio político a actores delegados y especializados (partidos, Estado).

Esta convergencia hacia estrategias de intercambio no se produce de forma inercial. Este texto se propone analizar las dificultades que éstas estrategias han planteado al movimiento sindical italiano y la manera en que estas dificultades han sido resueltas. Haciéndolo, se intenta sacar enseñanzas que permitirían, quizá, situar mejor los problemas del sindicalismo francés y las especificidades de su «crisis». En efecto, el sindicalismo francés tiene muchos trazos comunes con el sindicalismo italiano, en particular el pluralismo sindical. No obstante, hay dos especificidades: primeramente, una orientación hacia una estrategia de compromiso está muy cuestionada entre las organizaciones sindicales y constituye, incluso, el punto más conflictivo; en segundo lugar la crisis de la sindicalización ha tomado dimensiones desconocidas en los otros países europeos (quizá, con la excepción de España).

En efecto, en la mayor parte de los países de Europa del Norte y del Centro, las tasas de sindicalización, tradicionalmente de un nivel muy alto, han permanecido estables (en ciertos casos incluso han aumentado) ². Esta constatación no es nueva, pero indica que estos sindicatos de tradición socialdemócrata, han logrado superar mejor las tendencias a la crisis del sindicalismo. Nuestra tesis es que han superado mejor estas dificultades, esencialmente gracias a unas mejores opciones estratégicas que van precisamente en el sentido de una estrategia de intercambio político resumida más arriba. Probablemente una larga tradición socialdemócrata de compromiso, ha facilitado, en estos países, una adaptación estratégica a las nuevas condiciones económicas. Países en los que una tradición de este

tipo está ausente en la cultura sindical tienen mayor dificultad para poner en marcha tal estrategia; más que elecciones estratégicas pueden iniciar dinámicas que tienen una capacidad autopropulsora tanto en un sentido positivo como negativo, que encontramos, en seguida, bajo forma de círculo «virtuoso» o «vicioso» en los modelos económicos ³. A pesar de las condiciones económicas, en gran medida desfavorables, el movimiento sindical italiano ha intentado invertir el encorsetamiento económico por una opción estratégica: se presentará aquí un análisis del nacimiento, dificultades y resultados (limitados) de esta aproximación original ⁴.

1. Los hechos sobresalientes de la evolución de las estrategias sindicales en Italia, 1975-1984

La integración creciente en el mercado mundial (sobre todo europeo) y la debilidad relativa del capitalismo italiano, de la cual uno de los síntomas era el déficit permanente de la balanza de pagos, han estado en el origen de la reorientación del sindicalismo italiano después del «otoño caliente» de 1969-1970. Esta reorientación se ha traducido en una disponibilidad a contribuir, a través de una moderación reivindicativa, a superar las dificultades del país a través de una política programada y concertada de reactivación económica. Como vemos, esta reorientación coincide con la «quasi participación» del partido comunista en el gobierno durante el período 1976-1979 y su propuesta de una «austeridad de la izquierda», dentro de una estrategia de «compromiso histórico», pero estas interferencias no pueden ser entendidas en el sentido de una sumisión mecánica, según la teoría de la «correa de transmisión» (que el CGIL ⁵ ya había rechazado en los años cincuenta). Hay una cultura política común entre el PCI y la CGIL, que convierte a la lógica del intercambio más próxima (y compatible), pero las propuestas del sindicato han tenido su temporalidad y su especificidad propias, que se concreta en el hecho de que se trata de una propuesta común de tres confederaciones CGIL, CISL y UIL, que se han reagrupado en 1972 en el sentido de una «federación» unitaria. Las culturas sindicales

(católica y «socialdemócrata») de la CISL y de la UIL no han supuesto demasiados problemas de adaptación a sus seguidores en el momento de la reorientación hacia el compromiso social (incluso cuando la sindicalización de la CSIL era aún relativamente joven y ligada al movimiento asambleario).

El esfuerzo más grande de adaptación ha sido, pues, exigido a la formación comunista. Esta ha sido ayudada por la evolución paralela del PCI, y podía contar con la importancia de la tradición gramsciana, que valora términos como «estrategia de hegemonía», «alianza de clase» y «desarrollo productivo»⁶. No es, por tanto, sorprendente que los signos decisivos para la reorientación vinieran precisamente de la CGIL, más exactamente en forma de diversas declaraciones y propuestas de su secretario general, L. Lama. Pero antes de analizar la síntesis programática que ha sido elaborada durante una conferencia unitaria de delegados CGIL, CISL, UIL en EUR (suburbio de Roma) en enero de 1978, será necesario recordar el contexto en el que esta nueva estrategia sindical se ha desarrollado.

El compromiso político ha sido siempre una de las características del sindicalismo italiano. La especificidad de la orientación de los años setenta debe ser buscada en las consecuencias del ciclo de luchas 1969-1970. Es, gracias a estas luchas, y al establecimiento de una nueva relación de fuerzas por lo que el sindicalismo ha podido implantarse en los lugares de trabajo, especialmente en las fábricas del Norte, decretando la estructura de delegados obreros como la nueva instancia de base del sindicato. Esta nueva relación de fuerza ha sido reconocida por el empresario y por el Estado y se ha traducido en el «estatuto de los trabajadores» de 1970.

Ante la imposibilidad de recuperar su poder por un ataque frontal, la patronal había reaccionado con una estrategia de rodeo y de cerco en la que los dos componentes principales eran la «descentralización productiva» y la reestructuración productiva. La primera consistía en desplazar una parte de la producción de las grandes empresas hacia las pequeñas unidades no sometidas al control del sindicato o del Estado. La segunda consistía en la introducción de la automatización que, por su parte, también iba en contra del poder de control que el sindicato había adquirido a nivel de la producción. Bien entendido, se trataba de una estrategia lenta cuyos efectos no se hacían notar inmediatamente.

En un primer momento, los sindicatos aún conseguían sus posiciones en las empresas a través de una serie de acuerdos que establecían derechos de control (de información) sobre la organización del trabajo, la introducción de nuevas tecnologías e, incluso, la marcha general de la empresa. Estos acuerdos fueron aplicados de manera muy diversa, pero se puede ya constatar el comienzo de una evolución desde un sindicalismo de contestación hacia un sindicalismo de negociación.

Paralelamente el sindicato empezaba a desplazar su poder de negociación del nivel de la empresa al nivel político, con el fin de llevar a cabo reformas estructurales destinadas a la vez a garantizar formalmente los nuevos derechos de los trabajadores y ampliar la base productiva del país. En 1973, L. Lama propone, por primera vez de forma explícita, una tregua social y una alianza con los «capitalistas más avanzados» en el marco de una «programación democrática»⁷.

Dos factores van a acelerar la nueva orientación sindical: el acercamiento del PCI a la esfera gubernamental, después de la victoria electoral de 1976 y la agravación del problema de los pagos externos. Los efectos de la crisis económica mundial se superponen ahora a las deficiencias estructurales del capitalismo italiano, lo que conduce a los sindicatos a la toma de conciencia de que la salvaguarda de las ventajas salariales y sociales, previamente adquiridas, debe hacerse «compatible» con el desarrollo económico que se daría en medida suficiente para resolver el problema del empleo: el problema de la «compatibilidad» va a dominar el debate político y sindical de los años 1975-1979. Para el PCI, como para los sindicatos, no puede ser más que el resultado de la construcción de un «nuevo modelo económico» basado en los valores del «rigor», de la «eficacia» y de la «justicia»: este es el sentido de la proposición de Berlinguer de una política de austeridad de la izquierda. Ello supone, no sólo una orientación del modelo de consumo individual hacia un modelo de consumo colectivo, sino también la eliminación de toda suerte de «parasitismos», en particular del clientelismo y del burocratismo del Estado. Esto es por lo que, la visión a largo plazo, no ha impedido que, a corto plazo, el PCI y los sindicatos suscriban el análisis y las demandas que han sido formuladas de forma apremiante por los expertos del gobierno, así como del FMI, y que diagnostican, como problema esencial de la economía italiana, el del coste del

trabajo que alimenta la inflación y determina la baja competitividad y el déficit exterior. Ante la urgencia de la situación, la Federación sindical unitaria acepta en 1977 una primera serie de medidas que contribuyen a bajar el coste de trabajo: supresión de días festivos, lucha contra el absentismo, etc. Pero, sobre todo, la congelación temporal del mecanismo de la escala móvil, condición expresa del FMI para acordar un importante crédito internacional con Italia.

Las concesiones puntuales apunta una propuesta global de los sindicatos que será conocida como la «política de los sacrificios». En una entrevista en enero de 1978, L. Lama anuncia el «giro», rechazando la concepción sindical hasta entonces predominante del salario como «variable independiente». Se suscribe la idea, según la cual, en una economía abierta, el paro aumenta cuando los aumentos salariales sobrepasan los progresos en la productividad. Como consecuencia, preconiza, no sólo una moderación reivindicativa salarial, sino también la aceptación de la movilidad para absorber los «excedentes» aparecidos en varias grandes empresas. Esta nueva lógica va a impregnar la propuesta de intercambio político tal y como será resumida por el documento votado durante la conferencia sindical de la EUR en febrero de 1978 y que servirá como referencia de base para la actuación sindical de los años siguientes bajo la apelación «línea EUR».

Este documento consagra la nueva prioridad absoluta: la lucha contra la crisis y por el empleo. Para contribuir a una política anticrisis programada y concertada, los sindicatos se mostraron en aquél momento dispuestos a hacer las contribuciones y concesiones siguientes:

1. La limitación de los aumentos salariales (por primera vez un documento sindical reconocía abiertamente que era necesario hacerla en función de la evolución de la productividad).
2. La limitación del déficit público (con la aceptación de un alza de ciertas tarifas públicas).
3. Medidas para aumentar la movilidad de la mano de obra.

A cambio de estas concesiones, los sindicatos exigen medidas concretas de reformas en el marco de una programación económica global, que llevaría notablemente a:

1. El desarrollo prioritario del Mezzogiorno.
2. Un relanzamiento selectivo (y controlado) de las inversiones.
3. Una reforma fiscal para luchar contra la

evasión fiscal (que hacía recaer en Italia el peso de la fiscalidad únicamente sobre los asalariados).

Esta oferta de intercambio político sobreviviría a la salida del PCI de la coalición de «unidad nacional», en enero de 1979 y a su fracaso durante las elecciones de junio de 1979. Atravesará, no obstante, una dura prueba por la contraofensiva patronal, esta vez muy directa, que culminará, simbólicamente, con el despido de 20.000 asalariados de la Fiat y la organización de una manifestación antisindical en Turin en octubre de 1980, en la cual participan 40.000 cuadros y asalariados de esta fábrica. El Partido Comunista sacará como consecuencia el abandono de la estrategia del «compromiso histórico» («giro de Salerno» de noviembre de 1980). Las reacciones de los tres sindicatos son más contradictorias. Oficialmente, la línea EUR es abandonada bajo la presión de la izquierda sindical, durante la conferencia unitaria de Montecatini en marzo de 1981, pero, de hecho, la filosofía EUR continúa pesando en la estrategia de los años siguientes. Hay, no obstante, un cambio importante: mientras que en la época de la participación del PCI en la coalición de unidad nacional era, sobre todo la CGIL, la que presionaba en el sentido de las concesiones, ahora esta antorcha será recogida, sobre todo por la CISL, y, en menor grado, por la UIL y la minoría socialista dentro de la CGIL. La mayoría comunista de la CGIL no se opuso abiertamente para no poner en tela de juicio la unidad sindical.

Paradójicamente, es la actitud intransigente de la patronal la que reavivará la filosofía de la EUR. En efecto, la patronal denuncia, en junio de 1982, el acuerdo de 1975 sobre la escala móvil. Sigue una negociación laborista entre sindicatos, patronal y gobierno, que se traducirá en el acuerdo «triangular», de 22 de enero de 1983 (llamado también acuerdo Scotti, siguiendo el nombre del Ministro de Trabajo, negociador por parte del Gobierno) ⁸. Con este verdadero «pacto social», los sindicatos italianos se insertan en la categoría de «neocorporativismo», hasta entonces reservada a los sindicatos socialdemócratas de la Europa del Norte.

El acuerdo constituye, en efecto, la primera aplicación explícita de la estrategia del intercambio político inaugurada por la línea EUR: los sindicatos aceptan una reducción (del 15 al 20 %) del automatismo de la escala móvil, y una congelación de la negociación salarial a nivel de las

empresas durante 18 meses. A cambio, el gobierno se compromete en una serie de medidas fiscales y sociales: disminución del impuesto sobre la renta, (en particular neutralización de la «fiscal drag», ocasionada por la hiperinflación), mayor justicia fiscal, fiscalización de las cargas sociales, aumento de los subsidios familiares y medidas especiales (condiciones más favorables para ciertas tarifas públicas y de salud) en favor de las familias más humildes.

Rápidamente, las medidas decididas se revelan incapaces de yugular la inflación. Por otra parte, el gobierno no era capaz de poner en marcha las reformas de una manera eficaz. En consecuencia solicitaba, algunos meses más tarde, una renegociación de los acuerdos, de la cual esperaba concesiones suplementarias de los sindicatos para disminuir la dinámica de los salarios contenida en el mecanismo de la escala móvil. Una vez más, los sindicatos, en particular la CISL, se declararon dispuestos a hacer tales concesiones, pero reclamaban, a cambio, compromisos más precisos del gobierno y de la patronal en favor de la creación de empleo. Se siguió una nueva negociación «a tres» entre las confederaciones sindicales, la patronal y el gobierno que desembocó en la firma de un protocolo de acuerdo «triangular», el 14 de febrero de 1984 (día de San Valentín, por lo que será denominado «acuerdo de San Valentín»). Este acuerdo amplía las concesiones sindicales del acuerdo precedente sobre la disminución del automatismo de la escala móvil programando alzas salariales máximas durante el período de un año. Además de nuevas medidas de justicia fiscal y social, el gobierno es obligado a comprometerse de forma más precisa en el sentido de una política activa de empleo. Los compromisos gubernamentales recaían especialmente en: la creación de centros de observación sobre la evolución del empleo, contratos de solidaridad, contratos de empleo-formación, reforzamiento de las intervenciones públicas en favor de la reconversión industrial, medidas especiales para el desarrollo del Mezzogiorno ⁹.

Ante la sorpresa general, el mismo día del acuerdo la CGIL anuncia la suspensión de su firma mientras que no se realice una consulta a los asalariados sobre los términos de dicho acuerdo. Las otras dos centrales sindicales rechazan una consulta de este tipo y el gobierno, presidido entonces por el socialista B. Craxi, transformaba la parte del acuerdo que reducía los aumentos salariales en decreto ley. Esta decisión

no hacía más que reavivar el conflicto entre la CGIL, por un lado, y la CISL y la UIL por el otro, que habían solicitado, precisamente, esta intervención gubernamental.

La actitud de la CGIL estaba motivada por la toma en consideración de las reservas, cada vez mayores, de una parte de la base sindical de cara a una estrategia de concesiones. En efecto, durante los días que siguen al decreto gubernamental, en las fábricas del Norte se comenzaba a formar un movimiento de protesta de los consejos de fábrica «autoconvocados». La CGIL se situaba a la cabeza de este movimiento. Esta difícil elección tenía como efecto inmediato la ruptura de la unidad sindical y la irrupción de una nueva corriente discrepante en el interior de la CGIL, por la aparición de una oposición dura de la componente socialista que tomaba nítida posición en favor del gobierno Craxi.

No continuaremos aquí el relato de los acontecimientos, para analizar las diferentes posiciones aparecidas en el debate sindical y científico en torno a la estrategia del «intercambio político». Este debate tuvo una importancia capital y la reconstitución de las diferentes posiciones es necesaria para comprender el principio de una reorientación estratégica común, tal y como se dibuja de nuevo después de tres años.

2. El debate sobre el intercambio político

Como dijimos precedentemente, la CISL ha justificado los acuerdos triangulares de 1983 y 1984, con una teoría de intercambio que se reclama fiel a la línea EUR. La oposición a esta orientación estratégica vino esencialmente de la izquierda comunista del PCI y de la CGIL. Se empeñó en demostrar lo nocivo de esta orientación para el mantenimiento de la autonomía sindical, rechazando el origen de la misma en la línea EUR. La negación de la lógica del intercambio político se hizo, a la vez, en un plano teórico-metodológico y en un plano teórico-político.

2.1. El debate teórico

En el plano teórico-metodológico, los autores marxistas han denunciado la importación de

un concepto económico, por añadidura neoclásico, en el debate político. La crítica más vigorosa de esta concepción ha sido hecha por Laura Penacchi¹⁰. Demuestra como el concepto del intercambio político supone la existencia de un «mercado político» perfecto y la equivalencia estricta de bienes intercambiados. Así pues, el mercado económico. En realidad, en política como en economía, las relaciones de desigualdad predominan y nada garantiza la estricta equivalencia del acto de intercambio que llega a ser, así, «incalculable», por adelantado.

Este tipo de crítica metodológica ha sido, a su vez, rechazada por G. E. Rusconi¹¹. Según Rusconi, la teoría del intercambio político no está necesariamente ligada a la teoría del «mercado político», que se aplica más bien a la competición electoral; Rusconi toma el concepto del intercambio político en el sentido de una interacción, de un «juego» estratégico. En tal juego, no hay precisamente certeza de reciprocidad total del intercambio, sino que se trata, más bien, de un ajuste progresivo de los actores a través de una mezcla de crédito y de amenaza. (A propósito de la no reciprocidad total posible en el intercambio, Rusconi incide en subrayar que la teoría marxista admite también el intercambio desigual en materia económica). La posibilidad del intercambio no depende, pues, de un postulado «armonista», precisamente por que los asociados no cambian únicamente los bienes cuantificables, sino también el «sentido de su acción». Uno de los resultados del intercambio es justamente precisar (confirmar o redimensionar) su identidad. Nos parece que es ésta dimensión estratégica del intercambio la que contiene grandes potencialidades para la comprensión de la crisis de representación del sindicalismo. Esta concepción nos parece, en todo caso, compatible con la primera formulación de intercambio político hecha por A. Pizzorno, que la había enlazado directamente con el problema de la «formación de una nueva identidad» en el conflicto.

2.2. La concepción de la CISL

Una versión más «política» de esta formulación sociológica del intercambio político ha sido igualmente el objeto de una refutación de la fracción de la izquierda sindical. Se trata de trabajos de intelectuales próximos a la CISL, como el sociólogo G. Baglioni, el jurista G. Giugni, o el eco-

nomista E. Tarantelli¹². El conjunto de estos trabajos intentan enlazar los problemas italianos con los debates sobre el neocorporativismo en Europa, en los que habían participado esencialmente los autores anglosajones, alemanes y escandinavos.

No se puede resumir aquí, el conjunto de teorías sobre el neocorporativismo que habían dado lugar a una importante literatura al final de los años setenta y comienzo de los años ochenta¹³. Se recordará solamente que estas teorías parten de un problema de «gobernabilidad», al cual debían de enfrentarse los países europeos después del aumento de la conflictividad y del aumento de las demandas sociales. Con el fin de sostener la estabilidad económica y política, ciertos gobiernos habían intentado «implicar» a las organizaciones sindicales, atribuirles un «estatuto público» a través de una concertación institucionalizada al máximo. La mayor parte de los análisis comparativos constataron entonces una correlación bastante positiva entre concertación neocorporativista, tasas de sindicalización elevadas, bajo conflictividad social, buenos resultados económicos (en términos de competitividad y de inflación) y la garantía de salarios reales y una limitación del paro. El hecho de que la mayor parte de estos resultados positivos se produjeran en los países con gobiernos socialdemócratas, ha dado lugar a una serie de trabajos que han analizado el fenómeno, no desde el punto de vista del Estado y de sus necesidades de mediación de los intereses y de la canalización de los conflictos, sino desde el punto de vista de las organizaciones del movimiento obrero y de sus estrategias de transformación (concernientes, especialmente, al establecimiento del Estado de bienestar)¹⁴.

El conjunto de estos trabajos comparativos definen una serie de condiciones bajo las cuales los acuerdos neocorporativistas pueden efectivamente garantizar una cierta estabilidad económica y política. Algunas eran de orden organizativo (centralización e institucionalización del sistema de relaciones industriales), otras económicas (existencia de márgenes disponibles para las reformas) y otras, finalmente, políticas, entre las cuales contamos, en primer lugar, la existencia de un gobierno «pro-labour», amigo de las organizaciones sindicales y garantizante de que las reformas prometidas, a cambio de sacrificios convenidos, se llevarían a cabo.

Es esta última condición la que nunca fue satisfecha en Italia donde, a lo sumo, se podía ha-

blar de un gobierno «quasi-prolabour» durante el período de 1976-1979 (utilizando la expresión de A. Accornero ¹⁵, de un «quasi-gobierno prolabour»). En efecto, Italia constituye el único país europeo que nunca ha conocido la «alternancia», de la llegada al poder de un gobierno de izquierda. Ante esta carencia evidente, los intelectuales próximos a la CISL afirmaron entonces que un gobierno pro-labour no sería absolutamente necesario para que un intercambio político pudiera funcionar, sino que bastaría con un gobierno no abiertamente anti-labour ¹⁶. Ciertamente los gobiernos italianos siempre han formado parte de esta categoría, debido al fuerte componente «popular» de la democracia cristiana (uno de sus reflejos es, precisamente, la existencia del sindicato católico CISL). El carácter «no antilabour» de los gobiernos italianos se refuerza aún más por el hecho de que el partido cristiano-demócrata tenía permanentemente necesidad del apoyo del partido socialista, que, por su parte, estaba implantado en los tres sindicatos a la vez.

G. Baglioni llevó este racionamiento más lejos, afirmando no únicamente la posibilidad, sino también la necesidad de una estrategia sindical orientada al intercambio político incluso sin gobierno «amigo». Según él, el sindicato no puede permitirse el lujo de esperar «tiempos mejores». Por otra parte, la llegada de un gobierno de izquierda en tiempos de crisis no aumenta más que mínimamente los márgenes de distribución económica en favor de los trabajadores que la crisis había reducido drásticamente. Si el sindicalismo se sitúa en una actitud de espera no podrá impedir que la relación de fuerza continúe degradándose en su contra por el aumento del paro. La concertación, a través del intercambio político, sería pues para los sindicatos la única vía de salvación si se quiere evitar una decadencia inevitable. Un rechazo a la concertación, no podría más que favorecer la aparición de una «opción de mercado», a saber, de una orientación gubernamental netamente neo-liberal y «anti-labour» (a la manera Thatcher), que tendría como consecuencia la marginalización y la aceleración del debilitamiento del sindicato. Al contrario, la concertación reforzaría al sindicato, confiriéndole una «nueva legitimación» y «garantizando su poder de representación». Sin duda, dados los márgenes económicos y la relación de fuerza, el compromiso que resultaría sería menos favorable a los trabajadores que el de aquellos años de

prosperidad, pero se trata, precisamente, del único medio de superar la crisis, de crear empleos y de impedir la puesta en marcha de políticas recesivas ¹⁷.

Se ha presentado con un poco de amplitud la concepción del intercambio político desarrollada por Baglioni, fundamentalmente porque constituye el telón de fondo teórico de la orientación «neo-solidaria» que la CISL ha adoptado a partir de 1980 bajo el impulso de Carniti ¹⁸ del que Baglioni era uno de los inspiradores más importantes. Se puede fechar esta orientación a partir de la propuesta de la CISL en julio de 1980 de un «fondo de solidaridad» para desbloquear las negociaciones sobre la disminución del efecto inflacionista de la escala móvil. Este fondo, inspirado por el «plan Meidner» en Suecia, debía ser mantenido por un porcentaje (0,5 %) sobre los salarios y estaba destinado a promover el empleo, fundamentalmente ayudando a la reconversión de sectores en dificultades. Debía ser «congestionado» por los sindicatos, lo que constituía un verdadero «giro en la cultura sindical». En efecto, la implicación de los sindicatos en la «gestión de la economía» era presentada como contrapartida de la «contribución de los trabajadores en la recuperación del proceso de acumulación» ¹⁹.

Esta propuesta de la CISL había surgido, en principio, de manera espontánea en el curso de una reunión con el gobierno y no es sino progresivamente como se insertó en un proyecto «solidario» como el pacto antiinflacionista y la reducción del tiempo de trabajo, («menos horario-menos salario») a cambio de creación de empleo.

Es contra este proyecto de conjunto del intercambio político contra el que se ha dirigido la izquierda comunista de la CGIL, de la que presentaremos ahora el sentido fundamental de sus críticas.

2.3. La crítica de la izquierda CGIL y la oposición de B. Trentin

La crítica de la izquierda llamada «operativa» del sindicato, respecto al encuentro de una estrategia sindical de concertación y de compromiso no se manifiesta más que hasta después del acuerdo triangular del 14 de febrero de 1984 (a través del movimiento de los «consejos autoconvocados»). Esta izquierda operativa, bien implantada en la Federación unitaria de la Mecánica, en particular en las grandes fábricas de

Norte, rechazó siempre, por principio, toda lógica de intercambio y se había opuesto, en efecto, a la línea EUR de 1978 ²⁰.

La izquierda operativa quiere para siempre encerrar la acción sindical en lo que el antiguo operativo A. Accornero ha llamado el «modelo proletario» ²¹. Este modelo no puede hacer frente a una estrategia sindical más que como una sucesión de reivindicaciones, de luchas y de conquistas. Toda atención a aquellas reivindicaciones que no sean las que representan el interés de los obreros industriales se considera como una desviación de la acción sindical, una «colaboración subalterna» que debilita el poder sindical y su «autonomía». Incluso toda negociación/concertación a alto nivel se considera como una desviación hacia la institucionalización del sindicato. El sindicato institución se opone así al sindicato movimiento, única encarnación positiva del sindicato.

Es sobre esta base sobre la cual la izquierda operativa se opone a la política de sacrificios del PCI y de la CGIL. No es que los «obrerros metalúrgicos» del Norte no tengan consciencia de la necesidad de un acto de solidaridad con los parados del Sur, si no que no concebían otras formas de altruismo más que las luchas, que entendían llevar, para imponer también reformas sociales y de medidas de creación de empleo en favor del Sur. Como la relación de fuerza de las grandes fábricas del Norte les era desde largo tiempo favorable, no entendían como las dificultades económicas se acumulaban, por otra parte, con las dificultades del sindicato y como, más aún, el éxito de sus luchas por objetivos igualitarios y «garantizadores» de las conquistas, contribuían a aumentar las dificultades económicas y amenazaban, en último término, aislar y marginalizar a los sindicatos. En efecto, como ciertos observadores lo habían entrevisto ya en los años setenta ²², las luchas de los «metalúrgicos» del Norte llevaban, en sí mismas, los gérmenes de una desviación «corporativista».

Esta estrategia operativa tuvo su primera gran derrota en la Fiat en octubre de 1980 donde no supo impedir el despido de decenas de miles de obreros. Esta derrota tuvo un efecto dramático, pero no ocasionó una «revisión» global de la concepción operativa. Sin duda alguna, la fracción operativa se ha afirmado después con menos pujanza en el sindicato, e incluso dentro de la federación de la metalurgia de la CGIL no es mayoritaria actualmente, pero los acontecimientos

recientes han mostrado que la cultura operativa está todavía viva en el CGIL y, sobretodo, presente en el discurso de sus dirigentes ²³.

Se vuelve a encontrar una parte del discurso operativo, en los discursos del actual secretario general de la CGIL, B. Trentin. Trentin, sin embargo, descende de la antigua izquierda «ingraista» del PCI y ha teorizado el movimiento de los consejos del otoño caliente, a través de una lectura gramsciana que se distingue de una lectura de extrema izquierda de tipo operatista-espontaneista. Sobre la base de esta cultura política gramsciana, Trentin siempre ha considerado la intervención del sindicato en la economía y en la política dentro de una perspectiva de transformación a largo plazo, a través de un proceso lento de conquista de la hegemonía. Trentin ha sido uno de los artífices de la unificación sindical (en tanto que secretario general de FIOM-CGIL, así como de la Federación unitaria FLM). Por esta causa siempre ha defendido el pluralismo sindical, viendo incluso en la cultura católica de la CISL una contribución positiva a la cultura sindical italiana y un correctivo de ciertos defectos de la cultura marxista. No obstante, también ha combatido una cierta concepción «contraactualista», dominante en el CISL de los años cincuenta-sesenta y que era una especie de combinación del sindicalismo americano (presente a través de la escuela de formación de Florencia) y del catolicismo social. Este «contractualismo» corresponde en la terminología de Gramsci a la forma «corporativista» de la organización de los intereses. Esta filosofía limita la acción sindical únicamente a la esfera económica y no contempla la negociación colectiva más que sobre la base de una reciprocidad total del intercambio y de un equilibrio de poderes dentro de un orden social pluralista.

Pero el rechazo del «corporativismo» toma además un segundo sentido: el del rechazo a la intervención del Estado en las relaciones industriales, tal y como Italia la ha conocido en la época del corporativismo fascista. Esta segunda acepción de la noción de corporativismo ha estado, durante largo tiempo, menos explícita, pero ha resurgido a partir del debate sobre el «neocorporativismo» (debate, como hemos visto, de origen anglosajón). Es el rechazo de la intervención del Estado lo que ha estado en la base de las críticas contra los pactos antiinflación «neocorporativistas» de 1983 a 1984. Dicho esto, no se trata, en absoluto, del rechazo de un papel polí-

tico para el sindicato, (era, al contrario, la crítica que Trentin opone a la concepción contraactualista de la CISL de los años cincuenta), más bien se trata de un rechazo a dejarse arrastrar en un terreno unilateralmente definido por el Estado, y alinear la autonomía sindical sobre los planos esenciales: la negociación salarial («articulada») y el poder sindical a nivel de empresa (especialmente sobre las condiciones de trabajo). Ahora bien, sobre estos dos planos, la crítica al respecto de la «hipercentralización» del acuerdo de 1984 estaba justificada, pues, este acuerdo preveía la predeterminación de los aumentos salariales que habrían llevado a un «agotamiento» de los otros niveles de la «negociación articulada» (ya el acuerdo de 1983 había prohibido explícitamente la negociación a nivel de empresa).

Trentin ha sido uno de los iniciadores del concepto de las «reformas estructurales» anticapitalistas (que rápidamente han sido popularizadas por los escritos de A. Gorz). Ahora bien, en sus escritos de los años sesenta, Trentin se opone a toda forma de implicación de los sindicatos en las «políticas de renta», incluso en el contexto de un partido de izquierda en el poder e, incluso, si existían, como contrapartidas, ciertas reformas sociales y fiscales. Dos razones esenciales motivan el rechazo de la «política de los rechazos»: en primer lugar desviaba al sindicato de su objetivo prioritario de la conquista de un poder de negociación a nivel de la empresa y, en segundo lugar, no sería nunca una forma de garantizar de forma efectiva el poder adquisitivo de los asalariados. Se encuentra en un texto de 1965 una frase que constituirá una constante en la conducta de la acción sindical de Trentin: «incluso cuando el sindicato apoya concretamente (...) la puesta en marcha de medidas reformadoras; incluso cuando acepta que los trabajadores paguen un cierto precio por estas medidas, nunca, ni en ningún caso, debe delegar sus poderes, ni consentir sacrificios a cambio de promesas para el porvenir; debe, al contrario, poner desde el primer momento en la balanza toda el peso de su fuerza reivindicativa mantenida intacta (...)»²⁴.

Encontramos de nuevo en cierta medida esta concepción, aunque un poco más matizada en su libro escrito en 1977, en pleno período de «solidaridad nacional» y de preparación del giro de la EUR. Los matices indican su distancia, a la vez, del reformismo «centrista» de Berlinguer y del reformismo «de derecha» de Lama. En efecto, en 1977 Trentin toma también conciencia de los

efectos de la crisis, de la situación económica dramática de Italia y de la necesidad de medidas de urgencia para iniciar la reconversión económica: «no existe ningún espacio para maniobrar y escalonar en el tiempo los sacrificios que la clase obrera deberá soportar y asociarlos (...) a beneficios inmediatamente tangibles (...). Los sacrificios son hoy necesarios (...). Los «avances» serán perceptibles únicamente a medio plazo (...)»²⁵. Así pues, no hay objeción en cuanto a los objetivos de los sacrificios a cambio de las reformas que están en la base de las propuestas de Berlinguer y de Lama. La formulación de Trentin de los «sacrificios» y de la «significación de la clase» de un proyecto autónomo de austeridad está incluso próximo a Berlinguer y hace referencia explícitamente a la terminología de Gramsci que ve en los «sacrificios» de tipo «económico corporativo» la condición para que una clase pueda llegar a ser hegemónica dentro de una nueva alianza. La diferencia se centra esencialmente sobre los medios. De una parte se rechaza la idea de una tregua y del abandono de las conquistas esenciales a nivel de la empresa. Por otra parte, este poder de control puede ser utilizado para conceder (temporalmente y de manera negociada) alivios en la rigidez (horarios, movilidad, etc.), pero en ningún caso el sindicato puede renunciar a su propio poder de negociación y, en ningún caso, puede renunciar a la escala móvil. Hay una contrapartida esencial en todos estos sacrificios posibles, «es la asociación, bajo formas articuladas, al poder de decisión».

Después de este resumen de propuestas, que no hacen más que anticipar la propuesta del intercambio político de la línea EUR, es sorprendente leer cómo Trentin la juzga después de su fracaso en 1980. En efecto, subrayando que constituye la vía más avanzada del sindicalismo italiano, rechaza contemplar la oferta de un intercambio político. Al contrario, la novedad de esta estrategia consistiría en el hecho de que supera, precisamente, la «lógica de las contrapartidas». Después de sus propias propuestas anteriores, y sobre la base misma del documento votado en el EUR en 1978, esta lectura no es aceptable. De hecho, el documento rechaza únicamente la «lógica de un pacto social», pero contempla explícitamente las «contrapartidas» y las «garantías para que los sacrificios de los trabajadores coincidan efectivamente con un giro en la política económica del país»²⁶. La posición de Trentin no toma sentido más que cuando se acepta la

idea de que la lógica de las contrapartidas esté exclusivamente ligada a la filosofía «contractualista», precedentemente caracterizada. (Ahora bien, nosotros habíamos demostrado que no existe necesidad lógica para eso). De hecho, Trentin respeta y matiza su propia versión de una estrategia de sacrificios, en la que insiste en el carácter no cuantificable de las concesiones recíprocas. No se trata pues de un simple intercambio «menos salario» contra «más empleo», sino esencialmente de un intercambio cualitativo en el cual Trentin da prioridad a otras dos contrapartidas: más movilidad (negociada y controlada) frente a más participación en la decisión económica. Ahí puede estar el germen de una idea que Trentin tendrá la oportunidad de precisar en ulteriores intervenciones, a saber, una concepción que acepta el compromiso, no como un intercambio entre cantidades definidas una vez por todas, sino como una negociación evolutiva incluyendo «vías» (reglas) de verificación y de negociación (englobando niveles diferentes) ²⁷.

Esta vía nos parece más constructiva que la tentativa de evocar la «memoria de la EUR» para criticar la negociación centralizada de 1983 a 1984 desde el punto de vista del «sindicalista de base». Pues, sobre este plano, la argumentación de Trentin no convence y, al contrario, aparecía contradictoria. Pues, por un lado, el intentar salvar la línea EUR y las medidas de austeridad de la izquierda en la fase de «solidaridad nacional», declarando que, en la aplicación concreta, los acuerdos y las medidas ciertamente han fallado en lo que respecta a la creación de empleo, pero que, al menos, han garantizado salarios reales. Los asalariados, al contrario, habrían tenido una memoria «engañosa» de esta época, pues creían haber hecho los sacrificios sin que las promesas fueran atendidas. No obstante, esta memoria falsa (pues, en realidad, no habría habido ni intercambio ni propuesta de intercambio), reflejaría una conciencia «fundamentalmente justa» sobre los límites de un intercambio político neocorporativista ²⁸.

Estos razonamientos, un poco retorcidos, parecen tener como objetivo rebatir, por una parte, que la línea EUR haya constituido un giro en las estrategias sindicales italianas y, por otra parte, que haya una relación entre la estrategia EUR y la negociación de los pactos sociales de 1983 a 1984. El análisis del período 1976-1979 por G. Vacca ²⁹, no obstante «ingraista» como Trentin,

se opone formalmente a esta lectura. Según Vacca, la línea EUR constituye perfectamente una oferta de intercambio político, tanto como la propuesta de una austeridad de la izquierda por Berlinguer.

Contrariamente a ciertas afirmaciones de protagonistas comunistas (y a la autocritica del mismo Berlinguer), no se trataría de un intercambio «fallido», a causa de los errores y de los vicios en su aplicación (la lentitud administrativa, la mala voluntad de los cristiano-demócratas magnificando los sacrificios adelantados, etc.). Según Vacca, no es tanto «la lógica de los dos tiempos» (avance inmediato de los sacrificios a cambio de reformas a más largo plazo), la que está cuestionada (es inevitable a en este género de contratos), sino que es la concepción misma de las reformas programadas la que era defectuosa. Vacca disculpa, explícitamente, al movimiento sindical de una responsabilidad en este fracaso. De hecho sus responsabilidades consistirían únicamente en no estar primeramente automatizado respecto al proyecto del PCI. Esta aproximación no sugiere que el sindicato estuviera sumiso al partido según la tradición de la correa de transmisión, sino que constata, simplemente, que la componente mayoritaria, la CGIL, participa de la misma cultura política que el PCI.

El reproche fundamental de Vacca es que la estrategia de compromiso del PCI, se basaba en un análisis insuficiente de la evolución económica y de la crisis.

A pesar de la renovación política, el PCI arrastra todavía una visión heredada de la Tercera Internacional y de los tiempos de Togliatti. Esta visión denuncia el declive de la economía italiana, de la que hace responsables, en lo esencial, a los sectores «parasitarios» de la burguesía italiana. La insuficiencia de su propio análisis habría situado al PCI a remolque de otros análisis y estrategias económicas, como aquéllos que emanaban del Banco de Italia y del FMI.

Insertándose en un marco de análisis que pretendía elevar la competitividad internacional esencialmente por medio de una política de austeridad, dicha política no hacía, de hecho, sino reproducir los defectos estructurales del desarrollo obtenido por las exportaciones (basado en una especialización de los sectores de bajo coste salarial), sin haber hecho, paralelamente, un análisis en profundidad de los cambios de las condiciones de la competencia internacional. Las correcciones previstas (la ley sobre las recon-

versiones, etc.), eran ineficaces, no sólo a causa de la lentitud administrativa habitual, sino también debido a que una programación industrial dirigista y centralizada era, en efecto, incompatible con el grado de internacionalización alcanzado por la economía italiana.

Se podrá discutir estas tesis en detalle, pero se enfatizará, sobre todo, que el análisis comunista había tenido en cuenta, de forma insuficiente, los cambios tecnológicos y organizativos a nivel de las empresas y que había basado su estrategia en un análisis económico sesgado. Traduciendo este análisis a nuestros propios términos, se puede hablar de una infraadaptación del PCI con respecto a los objetivos externos. A todo esto correspondió una infraadaptación del movimiento sindical, que no ha dado importancia, en esencia, más que a los sacrificios a nivel salarial, despreciando una posibilidad de sacrificios cuantitativos que habrían podido acelerar la «modernización» de las empresas (las propuestas de Trentin, en torno a una «movilidad negociada y controlada» iban precisamente en esta dirección, pero no tuvieron consecuencias a causa de la visión esencialmente macroeconómica y dirigista a la que había evolucionado la política gubernamental con el apoyo activo del PCI).

No es este el lugar para ir más al fondo de este debate, pero recordemos que, hasta el comienzo de los años ochenta, no había verdaderamente divergencias de fondo en el interior del movimiento sindical, en cuanto a la necesidad de un intercambio político como contribución a una política de reactivación económica. ¿De dónde procedían las divergencias interiores que han conducido a la fractura de la unidad sindical? Según nuestro análisis, se explican esencialmente por los factores políticos.

2.4. Una lucha por la hegemonía política en el interior del movimiento sindical

Consideramos que el factor determinante, que explica el repentino rechazo de la CGIL a implicarse más a fondo en una estrategia de intercambio político, estaba en las pretensiones económicas de la CISL en el interior del movimiento sindical y en las del PSI, bajo la nueva dirección de B. Craxi en el interior de la izquierda política. Como ya habíamos dicho, la CISL había rehusado apoderarse del concepto de intercambio político e integrarlo en un proyecto de

«pacto de solidaridad» que sintonizaba con los proyectos semejantes de la izquierda sindical y política en Europa: el proyecto de fondo de solidaridad hacía referencia a las conquistas del movimiento obrero sueco; el proyecto de reducción de horarios estaba ligado a las luchas del movimiento sindical alemán. Estas referencias conferían una cierta dinámica al proyecto de la CISL, pues mostraban que se trataba de objetivos razonables en plazos bastante cortos. La CGIL no disponía de un proyecto movilizador semejante. Sus objetivos eran demasiado abstractos y carecían de perspectivas temporales de realización. De hecho, la CGIL era solamente víctima del fracaso de la estrategia de compromiso histórico y del agotamiento de la dinámica del movimiento de los consejos.

Es este apoyo activo del Primer Ministro Craxi a la estrategia de la CSIL lo que precipitó los acontecimientos. Su objetivo era, evidentemente, marginalizar a la izquierda marxista, en primer lugar al PCI, incluso a riesgo de provocar la fragmentación de la CGIL (en el interior de la cual la fracción socialista se afirmaba cada vez más). Esta estrategia no podía más que provocar una fuerte reacción del PCI. Nos hemos referido ya a que Berlinguer había abandonado, en efecto, la estrategia de «compromiso histórico», después del enfrentamiento en la FIAT en 1980 y había propuesto una nueva estrategia de «alternativa democrática» que carecía, no obstante, especialmente, de consistencia.

En el mismo año, el PCI había movilizado por primera vez los cuadros sindicales intermedios contra la dirección de la CGIL, rechazando la propuesta de los fondos de solidaridad de la CISL. Es de esta época de la que datan los primeros reproches en cuanto a un marco de democracia interna y de debate sindical en el interior de la CGIL.

El PCI podía, en este esfuerzo de movilización, contar con el desencanto permanente de los cuadros intermedios, procedentes de la lucha de 1969-1970 y con una fuerte tendencia «operativa». Es necesario precisar que no se trataba, pues, de movilizar «la base» sindical contra los «dirigentes». De hecho, la mayor parte de las encuestas sociológicas y los sondeos políticos mostraron que el obrero de «base» había cambiado mucho y estaba cada vez menos inclinado a seguir una estrategia de conflicto duro. Este cambio afectó incluso a la base obrera en la industria del metal de la Italia del Norte. Según los resultados

de una encuesta en profundidad y plurianual de un Centro de Investigaciones del PCI, dirigido por A. Accornero ³⁰, entre las tres «culturas obreras» que se pueden encontrar dentro de la Fiat, aquella favorable a una «congestión» a la alemana es hoy mayorista.

Si se trataba, más bien, de un conflicto entre diferentes niveles en el interior del aparato sindical, se hizo evidente que los cuadros operativos disponían aún de un gran potencial de movilización, sobre todo si estaba unido al del partido comunista. En esta situación, y a pesar de la hostilidad personal entre L. Lama y E. Berlinguer, la dirección de la CGIL no podía más que actuar poniéndose a la cabeza del movimiento de consejos «autoconvocados». Este movimiento tenía también un calado importante en el sector público, caracterizado por una tasa de sindicalización muy elevada. Los asalariados del sector público representaban, en el interior del movimiento sindical, las verdaderas víctimas de la línea EUR, pues la política de austeridad les había afectado especialmente a ellos, con el resultado de una diferencia de salarios intolerable, que finalmente condujo al movimiento del «Comité de base» (COBAS) en 1987. Retrospectivamente se puede, pues, decir, que desde el punto de vista de la supervivencia de la organización, la dirección de la CGIL había actuado bien, pues el riesgo de ruptura era real.

La estrategia del PCI era, por otra parte, bastante hábil, pues llegó a superar la dimensión de descontento sectorial llevando la lucha contra los decretos de Craxi como una lucha por la defensa de la democracia. Como hemos visto, el decreto del gobierno constituía la primera intervención del Estado en la autonomía de la negociación colectiva, además sobre la base de un acuerdo separado que excluía a la organización sindical más representativa. La forma misma del decreto eludía la instancia de control parlamentario. Con algunas exageraciones el PCI mostraba en los modos de Craxi resabios de autoritarismo antidemocrático. En efecto, el Gobierno Craxi no era más fuerte que las coaliciones precedentes bajo dirección cristiano-demócrata y la conjunción de una táctica obstruccionista en el parlamento y de un movimiento de protesta de masas obligaba a Craxi a retirar las partes de su decreto que limitaban temporalmente la libertad de la negociación colectiva articulada. Podríamos, pues, considerar, que el PCI y la CGIL habían salido vencedores del enfrentamiento con el PSI y la CISL, si el

PCI no hubiera querido, de alguna forma, prolongar este éxito con su iniciativa de organizar en junio de 1985 un referéndum destinado a abolir el decreto Craxi y a restablecer íntegramente el mecanismo de la escala móvil. Esta maniobra, aparentemente destinada a «aniquilar» al adversario, se volvió en contra del mismo PCI, pues, incluso si el resultado (46 % de sí) muestra, una vez más, la tasa de movilización elevada, el fracaso final ha sido recibido como una victoria política de Craxi contra el PCI (que el año anterior había resultado el primer partido tras una consulta electoral).

La CGIL estaba comprometida, de alguna manera, a regañadientes en el referéndum. La derrota era, entonces, no tanto una derrota de la CGIL como de Lama. Al contrario, abre una posibilidad de vuelta a las prácticas sindicales más unitarias, incluyendo las aproximaciones de concertación. Ciertamente, la victoria del «no», en el referéndum ha reforzado las certezas de la dirección de la CISL y ha impedido, hasta ahora, la menor veleidad de autocrítica de este sindicato sobre los errores del período 1983-1989, pero implícitamente la CISL reconocía, ahora, que la concertación no debía tomar formas tripartitas institucionalizadas y centralizadas, sino que debía procederse por etapas, no se debía despreciar la forma tradicional de la negociación por sectores y debía, más que en el pasado, implicar a los mismos trabajadores.

Si se mira la evolución de la relación de fuerza a largo plazo entre las tres confederaciones, se piensa que la tentativa hegemónica de la CSIL no tuvo los efectos descontados. Basándose en las cifras de las afiliaciones de las tres confederaciones durante el decenio 1977-1986, el peso numérico de la CSIL no cambió (la CISL representa siempre un tercio de los sindicatos) ³¹. El peso de la CGIL no bajó más que de una manera marginal, pero este sindicato representa siempre más de la mitad de los sindicatos. Ciertamente, este resultado aparecía artificialmente engordado, ya que la CGIL ha reclutado en los últimos años, esencialmente, en la categoría de jubilados, que representan actualmente el 38 % de los 4,6 millones de afiliados a la CGIL (contra el 28 % en la CISL, y solamente el 12 % en la UIL). Si se toma en consideración únicamente a los asalariados entre los afiliados, la relación CGIL-CISL no se ha modificado más; por contra, se ve aparecer una corriente muy neta de «reformismo tran-

quilo» de la UIL, que ha logrado aumentar su representatividad del 14 al 18 %.

Pero lo que verdaderamente duele, más que estas modificaciones marginales de la relación de fuerza intersindical es la caída general de la tasa de sindicalización del 49 % en 1977 al 40 % en 1986. Introduciendo una diferenciación todavía más sutil, se observa que esta evolución se explica sobre todo por la mutación de la composición social de los asalariados y la restructuración industrial. La primera víctima de esta mutación es la CGIL, el sindicato «industrial» tradicional, fuertemente implantado en la gran industria del Norte golpeada por la crisis. Los asalariados de la industria representan siempre el 50 % de los efectivos salariales de la CGIL (solamente un poco más de un tercio para el CISL y la UIL). Ninguno de los tres sindicatos ha podido hacer progresos en el sector, actualmente en expansión, el de los servicios comerciales. El único sector (a parte de la agricultura) con una tasa de sindicalización elevada y estable es el de los servicios no comerciales (esencialmente el sector público). En este sector, el peso de la CISL se debilitó un poco, pero permanece como primer sindicato. Es aquí donde se concentra la mayoría de los sindicatos «autónomos», entre los que algunos tienen una orientación muy categorial y, por tanto, muy corporativista. Las cifras sobre las afiliaciones aportadas por estos sindicatos no tienen la misma fiabilidad que las aportadas por las tres confederaciones. Sumándolas, se obtiene 4,5 millones de inscritos a los sindicatos autónomos en 1986-1987, que correspondería a la mitad de los efectivos de las tres confederaciones ³². Ciertamente es preciso tomar estas cifras como una indicación maximalista, pero esto no impide reconocer, que en ciertos sectores de la función pública, los sindicatos confederados son ya muy minoritarios, y este fenómeno tiende a acentuarse con la creación de COBAS y otros sindicatos nuevos ³³.

Desde un punto de vista estratégico, las tres confederaciones pueden deducir de estas cifras una crisis latente de la sindicalización, que se presenta como un factor que debería unirles bastante más que dividirles. Por otra parte, cada una de las organizaciones intenta actualmente afrontar este problema a partir de su especificidad cultural propia, pero todas ponen el acento sobre la necesidad de encontrar la actitud unitaria que daba la fuerza a los sindicatos en los años setenta.

Conclusión: crisis del sindicalismo y dimensión estratégica



¿Qué enseñanzas generales puede inspirar el debate italiano respecto a la crisis del sindicalismo en Francia? Para resumir brevemente nuestra argumentación, partimos de la hipótesis de que la crisis del sindicalismo francés refleja una crisis de representación. Bien entendido, el sindicalismo francés se ha visto también debilitado por la crisis económica, que ha disminuido su poder de negociación (por el aumento de las tasas de paro), pero el efecto del paro habría debido de tener los mismos efectos sindicales en los otros países (lo que no es el caso, como hemos visto).

De hecho, la crisis económica se combina con las mutaciones sociales y los cambios de valores y, es ésta combinación, la que conduce a una creciente heterogeneidad (objetiva y subjetiva), de los asalariados, que es la base de la «crisis de la representación» del sindicato. La representación de los intereses de los asalariados (de la clase obrera), no es ya concebible como un simple aditivo dado. La solidaridad de los asalariados necesita ser construida mediante un proyecto unificador. Así pues, la crisis económica ha, precisamente, quebrantado el proyecto reivindicativo que ha servido, hasta ahora, del elemento unificador del sindicalismo. En efecto, el seguimiento de una estrategia reivindicativa (salarial), puramente cuantitativa, se percibía como contradictoria con el objetivo de la creación de empleo y de la salida de la crisis.

A partir de esta situación, la crisis de representatividad del sindicalismo llega a convertirse en un problema por su capacidad estratégica (o, si se quiere, política). Por su capacidad estratégica se entiende su capacidad de jerarquizar sus reivindicaciones de una manera nueva y de presentar un proyecto global que permite, no solamente unificar su propia representación, (sobre la base más amplia posible), sino también reflexionar sobre las vías y los medios (recursos) con que cuenta ponerse en marcha para alcanzar sus objetivos. Esto supone, como último análisis, reflexionar también sobre la eventuales alianzas y los compromisos con otras fuerzas sociales.

Esta situación necesita, pues, de opciones, por otra parte, más claras, ya que la situación se acer-

ca a un dilema. En efecto, privilegiar las reivindicaciones tradicionales puede, en un principio, reforzar la representatividad de ciertas capas de la clase obrera. Tal estrategia comporta, no obstante, el riesgo de una desviación corporativista y de una marginación política y, en último término, de un estrechamiento de la representatividad del sindicato. A la inversa, una estrategia de alianza y de compromiso bastante «adaptativa» (que recogería los objetivos estratégicos y económicos de los otros actores como «objetivos dados»), conlleva el riesgo, también, de engendrar una crisis de la representación, si los resultados previstos no corresponden, o lo hacen insuficientemente, a las previsiones, incluso a los sacrificios de los seguidores. Una estrategia de compromiso y de intercambio político no es, pues, una garantía de éxito. Todo depende del contenido del intercambio, de la funcionalidad de las concesiones para una estrategia económica global y de la movilización y de la adhesión consciente de los sindicalistas y de los sindicatos. Estos problemas nos parecen más fundamentales que los de la forma de intercambio político, sobre los cuales el debate científico se concentró durante mucho tiempo, criticando la centralización de las relaciones sindicatos-Estado-patronal en los pactos «neocorporativistas».

Resumen

Los años 1975-1985 marcan un cambio fundamental en las estrategias sindicales en Italia, que puede ser descrito, según el autor, con el paradigma del «intercambio político». Se trata de una variante de compromiso político, donde, en un contexto de crisis económica, los sindicatos renuncian a utilizar plenamente su poder de negociación sobre reivindicaciones inmediatas, a cambio de obtener satisfacción a reivindicaciones «estructurales» a más largo plazo, el texto evoca las dificultades que encontraron al llevar a cabo esta estrategia, y el debate científico y político que la acompañó.

BIBLIOGRAFIA

- ACCORNERO, A. (1981): «Sindacato e rivoluzione sociale», in *Laboratorio politico*, 4.
 ACCORNERO, A. (1988): «Torino da laboratorio a caso limite», in *Politica ed Economia*, 1.
 ACCORNERO, A., et al. (1985): «I tre "tipi" di operai della Fiat», in *Politica ed Economia*, 5.

- BABLIONI, G. (1980): «Fondo di solidarietà: una svolta nelle cultura sindacale», in *Mondoperaio*, 12.
 BABLIONI, G. (1983): «La contrattazione qualitativa nella strategia complessiva del sindacato», in Perruli/Trentin.
 BABLIONI, G. (1984): «Contribution à la table ronde "Per analizzare l'accordo del 14 febbraio"», in *Prospettiva sindacale*, 51, mars.
 BABLIONI, G. (1986): *La politica sindacale nel capitalismo che cambia*. Rome-Bari, Laterza.
 BABLIONI, G. (1988): *Le relazioni industriali in Europa negli anni '80*. Rome, CESOS, Février (Ms., en voie de publication).
 BARISI, G. (1989): «La vitalité du syndicalisme italien», in *Notes de Conjoncture Sociale*, n.º 311, 6 mars.
 BRUNETTA, R. (1989): «Politique des revenus et réforme de l'échelle mobile», in Maruani, M., et al. (ed.): *La flexibilité en Italie*. Paris, Syros.
 CAMERON, D. R. (1984): «Social Democracy, Corporatism, Labour Quiescence and the Representation of Economic Interest in Advanced Capitalist Society», in Goldthorpe, J. H. (ed.): *Order and Conflict in Contemporary Capitalism*. Oxford etc., OUP.
 CARNITI, P. (1985): *Remare controcorrente. Una proposta di solidarietà per il lavoro*. Rome, Edizioni Lavoro.
 CESOS (1988): *Le relazioni sindacali in Italia. Rapporto 1986/87*. Rome, Edizioni Lavoro.
 COUFFIGNAL, G. (1978): *Les syndicats italiens et la politique*. Grenoble, PUG.
 ESPING-ANDERSEN, G. (1985): *Politics Against the Market: The Social Democratic Road to Power*. Princeton, Princeton U. P.
 FERRANTE, G. (ed.) (1986): *Il futuro del sindacato*. Rome, Ediesse.
 GHEZZI, G., y ROMAGNOLI, U. (1986): «Italie», in Lyon-Caen, A., y Jeammaud, A. (eds.): *Droit du travail, démocratie et crise en Europe occidentale et en Amérique*. Arles (Actes Sub).
 GIUGNI, G. (1985): «Concertazione sociale e sistema politico in Italia», in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 25 (republié in: Ferrante, 1986).
 GOLDEN, M. (1982): «L'austerità e i rapporti base-vertice nel caso dei metalmeccanici», in *Laboratorio politico*, 5-6 (republié in: Ferrante, 1986).
 GRISONI, D., y PORTELLI, H. (1976): *Lutte ouvrières en Italie (1960-76)*. Paris (Aubier Montaigne).
 KORPI, W. (1983): «Political Democracy as a Threat to Capitalism. A comparison between pluralism, neo-corporatism and a power resource perspective», in Matthes, J. (ed.): *Krise der Arbeitsgesellschaft?*. Frankfurt/New York (Campus).
 PAGGI, L., y D'ANGELILLO, M. (1986): *I comunisti e il riformismo. Un confronto con le socialdemocrazie europee*. Turin (Einaudi).
 PENNACCHI, L. (1981): «Sindacato e programmazione», in *Laboratorio politico*, 4.
 PERULLI, P., y TRENTIN, B. (eds.): *Il sindacato nella recessione*. Bari (De Donato), 1983.
 PIZZINATO, A. (1988): «No è più il tempo della concertazione», in *Rinascita*, 5 mars.
 PIZZORNO, A. (1978): «Political Exchange and Collective Identity in Industrial Conflict», in Crouch, C., y Pizzorno, A. (eds.): *The Resurgence of Class Conflict in Western Europe Since 1968*, vol. 2. Londres etc. (McMillan).
 POLLAK, M., y RUFFAT, M. (1987): «Le néocorporatisme: ruptures et continuités», en *Bulletin de l'Institut d'Histoire du Temps Présent*, n.º 29 et 30.
 REHFELDT, U. (1984): «Pratiques néocorporatistes en Europe», in *Cahiers du CRMSI*, n.º 6, mars.
 REHFELDT, U. (1989): «Le renouveau des stratégies syndicales en RFA», in *Cahiers de Recherche du GIP Mutations Industrielles*, n.º 26, 1er mars (une version remaniée paraîtra dans les actes du Colloque «La Crise des Syndicats en Europe», du 9-10 mars 1989 aux Presses de la FNSP), (= 1989a).
 REHFELDT, U. (1989): «Du syndicalisme traditionnel aux nouveaux modes de négociation», in *Atlas de la puissance économique*. Paris (Hachette) (= 1989b).
 RUSCONI, G. E. (1984): *Scambio, minaccia, decisione*. Bologna, Il Mulino.
 RUSCONI, G. E. (1986): «Gioco strategico e logica decisionale», in *MicroOmega*, 3.
 SANTI, E. (1987): *Un decennio di sindacalizzazione (1977-1986)*. Ms. Rome, CESOS, octobre (paru avec des annexes réduites, in: CESOS, 1988).

- TARANTELLI, E. (1986): *Economía política del trabajo*. Turin (Utet).
- TRENTIN, B. (1967): «Tendances actuelles de la lutte de classe et problèmes du mouvement syndical face aux développements récents du capitalisme européen», in: *Les Temps Modernes*, n.º 249, février.
- TRENTIN, B. (1980): *Il sindacato dei consigli*. Rome, Editori Riuniti.
- TRENTIN, B. (1982): «Il sindacato come soggetto politico: riflessioni critiche e prospettive», in *Problemi del Socialismo*, 24-25.
- TRENTIN, B. (1984): *D'exploités à producteurs*. Paris, Eds. ouvrières.
- TRENTIN, B. (1986): Préface à: Ferrante.
- VACCA, G. (1987): *Tra compromesso e solidarietà. La politica del PCI negli anni '70*. Rome, Editori Riuniti.
- VISSER, J. (1989): «Westeuropäische Gewerkschaften im Umbruch», in *Gewerkschaftliche Monatshefte*, 1 (trad. française: «Syndicats européens: la grande mutation», in *Problèmes économiques*, n.º 2132, 5 juillet, 1989).

NOTAS

¹ Este paradigma ha sido introducido en el estudio de las relaciones industriales por PIZZORNO, A. (1978). Para el seguimiento del debate científico y de sus repercusiones políticas en Italia, cfr. cap. 2.

² Cfr. VISSER, 1989, y REHFELDT, 1989 b).

³ Cfr. los esquemas opuestos del «círculo virtuoso socialdemócrata» y del «círculo vicioso italiano», en Paggi/d'Angelillo, 1986.

⁴ Inicialmente se había contemplado presentar igualmente el caso alemán de una estrategia sindical orientada hacia el compromiso que es más antiguo, pero recientemente ha tenido adaptaciones importantes. Podemos remitirnos a REHFELDT, 1989 a).

⁵ Se recordará las siglas de las tres grandes confederaciones italianas: CGIL: el más grande de los sindicatos italianos, con mayoría comunista; alrededor de 1/3 de los responsables son socialistas, hay un «tercera componente» de afiliados de origen de extrema izquierda, generalmente sin pertenencia a un partido político. CISL: Central de orientación católica; ciertos dirigentes como el actual secretario general están ligados al partido cristiano demócrata; hay una minoría de izquierda y de extrema izquierda, en el interior de la cual el partido socialista (PSI), ha ascendido en influencia (el antiguo secretario general, P. Carniti, muy próximo a PSI). UIL: la más pequeña confederación, compuesta de tendencias socialistas, socialdemócratas y republicana (el secretario general es socialista).

⁶ Esta manera de pensar unió las alas de la derecha y de la izquierda del partido que están también presentes en el sindicato. Sus representantes más notables son el antiguo secretario general de la CGL, L. Lama y el actual ocupante de esta función, B. Trentin.

⁷ Propuesta de Lama al Comité Directivo de la CGIL, de 30 de enero de 1978 (cit., GRISONI/PORTELLI, 1976, 196). Esta propuesta es entonces atacada a la vez por el ala de la izquierda de la CGIL y la de la CISL. Lama vuelve a la carga en una entrevista al final del mismo año, en la que propone explícitamente el intercambio político (...) tenemos entre las manos un gran arma: la del salario. Pero queremos emplear este instrumento en una visión global de los intereses del país, no únicamente en los de aquellos que representamos directamente» (entrevista en Paese Sera, 14-XII-73, cit., en: COUFFIGNAL, 1978, 259).

⁸ Muy exactamente este acuerdo se llamó en Italia, «Lodo Scotti», lo que en lenguaje jurídico un poco arcaico puede significar, arbitraje Scotti. Esta apelación quiere acreditar la idea de que el gobierno estaba dispuesto a arbitrar las posiciones de los interlocutores sociales. De hecho, como veremos, el gobierno estaba del todo comprometido como una parte en esta negociación y ha tomado, en esta situación, alineaciones propias (Cfr. GHEZZI/ROMAGNOLI, 1986).

⁹ Para una presentación muy clara de la lógica y del contenido de los acuerdos de 1983 y 1984 (pero esencialmente desde un punto de vista económico). Cfr. BRUNETTA, 1989.

¹⁰ PENNACCHI, 1981.

¹¹ Cfr. en articular RUSCONI, 1984 Y 1986.

¹² G. Baglioni ha sido director de la importante escuela de formación de la CISL de Florencia. Está muy ligado a la izquierda cislina de Milán, que edita la importante revista teórica «Prospectiva sindical». Baglioni está actualmente apartado de estas actividades académicas, presidente del Centro de Investigación CESOS de la CISL. G. Giugni ha sido colaborador de la escuela de Florencia en los años sesenta. Ha jugado un papel importante en la redacción del «estatuto de los trabajadores», de 1970. Actualmente es senador socialista y preside la Comisión de Trabajo del Senado donde ha redactado un importante proyecto de ley destinado a regular el derecho de huelga en el sector público. E. Tarantelli ha trabajado en principio como investigador en la Banca de Italia y llegó a ser, a continuación, consejero de la CISL, en el momento de las negociaciones de 1983-1984. El compromiso político de Giugni y Trantelli ha hecho de ellos un banco del terrorismo de extrema izquierda. Giugni fue gravemente herido en un atentado en 1983; Trantelli fue asesinado por las Brigadas Rojas en 1985. Entre sus trabajos cfr. en particular, GIUGNI, 1985; TRANTELLI, 1986, y BAGLIONI, 1986.

¹³ Para una bibliografía crítica en lengua francesa, REHFELDT, 1984, y POLLAK/RUFFAT, 1987.

¹⁴ Los más representativos de esta orientación son KORPI, 1983; ESPING-ANDERSEN, 1985, y CAMERON, 1984. Para un intento de vista sinóptico cfr. REHFELDT, 1989 b).

¹⁵ ACCORNERO, 1984.

¹⁶ Especialmente GIUGNI, 1985, y BAGLIONI, 1986.

¹⁷ Las citas están extraídas de BAGLIONI, 1983 y 1984. Para una formulación más matizada cfr. BAGLIONI, 1986. Recientemente Baglioni se ha mostrado muy pesimista en cuanto a las posibilidades de intervención política de los sindicatos en Europa, declarando que el declive de las prácticas neocorporativistas de concertación no conducen, por el momento, a un giro completo del modelo «pluralista» (BAGLIONI, 1988).

¹⁸ Cfr. la recopilación de los escritos e intervenciones de CARNITI (1985) durante el período 1981-1985.

¹⁹ BAGLIONI, 1980.

²⁰ Cfr. GOLDEN, 1982.

²¹ ACCORNERO, 1981.

²² Entre ellos PIZZORNO, A., y TRENTIN, B.

²³ Muy sintomático, por ejemplo, el artículo de PIZZINATO, 1988.

²⁴ Intervención en un Coloquio del Instituto Gramsci en 1965. TRENTIN, 1967.

²⁵ TRENTIN, 1984, p. 120.

²⁶ Documento de la Asamblea de la EUR del 13-14 de febrero de 1978, extraído en: *Quaderni di Rassegna sindacale*, n.º 100 (1983).

²⁷ Cfr. TRENTIN, 1980, y, para el comienzo de sus nuevas propuestas: TRENTIN, 1986.

²⁸ TRENTIN, 1982.

²⁹ VACCA, 1987.

³⁰ Cfr. ACCORNERO, 1985, y ACCORNERO, 1988.

³¹ Todas las cifras sobre la sindicalización están sacadas del estudio, SANTI, 1987.

³² Cifras proporcionadas por. *Il Mondo*, 8-VI-1987, cit., en: CESOS, 1988.

³³ Cfr. el análisis de BARISI, 1989, del que no compartimos, no obstante, la apreciación demasiado unilateralmente positiva de los movimientos aparecidos en la función pública.



POLITICA I SOCIETAT A ESPANYA: 1977-1989

NUMERO 33

S U M A R I

Presentación

ARTICLES

MARIANO FERNANDEZ ENGUITA:

Los usos cambiantes de la libertad y de la propiedad

FAUSTINO MIGUELEZ LOBO:

Estructuración de clases y desigualdad: la España de los años setenta y ochenta

DIEGO LOPEZ GARRIDO Y JOAN SUBIRATS:

El proceso de toma de decisiones legislativas. Las relaciones Gobierno-Parlamento en España (1977-1986)

CARLOTA SOLE:

La recesión del neocorporativismo en España

JOAN BOTELLA:

Les élites polítiques de la Catalunya democràtica

GABRIEL COLOME:

El Partit dels Socialistes de Catalunya

ESTHER BARBE:

La transición española: Cambio y continuidad en la política exterior y de seguridad

JUAN HERNANDEZ BRÁVO:

El insularismo canario: caracterización política, ofertas electorales y resultados

JEAN-YVES NEVERS I ARI YLONEN:

La situación financiera de las ciudades en periodo de recesión económica (1975-1985): un análisis comparativo de diez países

MONTSERRAT BARAS:

Bibliografía sobre sistema política español

SUSCRIPCIONS

ESPANYA:	Tarifa ordinaria	3.300 Ptas.
	Tarifa de col·laboració	3.900 »
	Tarifa d'estudiants	2.500 »
ESTRANGER:	Tarifa única (correo normal)	40 S

(Tarifes anuals, validesa per a 3 exemplars.)